



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

## Pleno. Sentencia 155/2021

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA, representado  
por LUIS ALBERTO LONGORIA MUÑOZ

### RAZÓN DE RELATORÍA

En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 21 de enero de 2021, los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera han emitido la siguiente sentencia, que resuelve declarar **IMPROCEDENTE** e **INFUNDADA** la demanda de *habeas corpus* que dio origen al Expediente 04726-2018-PHC/TC. El magistrado Ferrero Costa, con voto en fecha posterior, coincidió con el sentido de la sentencia.

El magistrado Sardón de Taboada emitió un voto singular declarando fundada la demanda.

Se deja constancia de que el magistrado Blume Fortini emitió un voto singular que será entregado en fecha posterior.

La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza la sentencia y los votos antes referidos, y que los magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en señal de conformidad.

Flavio Reátegui Apaza  
Secretario Relator

SS.

LEDESMA NARVÁEZ  
FERRERO COSTA  
MIRANDA CANALES  
BLUME FORTINI  
RAMOS NÚÑEZ  
SARDÓN DE TABOADA  
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada, que se agregan. Se deja constancia que el magistrado Ferrero Costa votará en fecha posterior.

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Espitz Pelayo Beteta Amancio, abogado de don Jhon Tulio Romero Lloclla, contra la resolución de fojas 599, de fecha 12 de julio de 2018, expedida por la Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que declaró improcedente la demanda de *habeas corpus* de autos.

### ANTECEDENTES

Con fecha 12 de marzo de 2018, don Luis Alberto Longoria Muñoz interpone demanda de *habeas corpus* a favor de don Jhon Tulio Romero Lloclla (f. 1), y la dirige contra doña Carolina Fabiola Mejía Torres, jueza a cargo del Cuarto Juzgado Unipersonal de Huánuco, y contra los señores Gerónimo De la Cruz, Aquino Juárez y Marín Sandoval, jueces integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

Solicita que se declare la nulidad de: (i) la sentencia 26-2017, Resolución 3, de fecha 9 de mayo de 2017 (f. 97), que condenó al beneficiario a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo; (ii) la sentencia de vista, Resolución 13, de fecha 4 de octubre de 2017 (f. 82), que confirmó la precitada sentencia, por haberse se producido la prescripción de la acción penal con fecha 7 de febrero de 2017, (Expediente 00087-2015-58-1201-JR-PE-01). Alega la vulneración de los derechos a la libertad personal y al debido proceso. Denuncia también la vulneración del derecho a la libertad personal y del principio de no lesividad.

Sostiene el actor que el beneficiario participó en las elecciones generales del año 2011, por la lista parlamentaria del Partido Aprista Peruano (PAP), para el Congreso de la República, para lo cual se inscribió con fecha 7 de febrero de 2011, y el Jurado Nacional de Elecciones de Huánuco admitió dicha lista el 10 de febrero de 2011 y dispuso la



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

publicación de candidatos, en cuya hoja de vida se consignó que el beneficiario era egresado de educación superior.

Agrega, que el beneficiario con fecha 7 de julio de 2014, también se inscribió como candidato para la elección del Gobierno Regional de Huánuco, en cuya hoja de vida consignó que no concluyó estudios superiores, la cual fue objeto de tacha, que fue declarada infundada por el Jurado Nacional de Elecciones de Huánuco, decisión que, al haber sido apelada, fue confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución 1784-2014-JNE.

Precisa que la Fiscalía Provincial Penal de Huánuco formalizó denuncia penal en contra del favorecido por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, cuyo verbo contenido en el artículo 411 del Código Penal es el probar, el cual es un futuro imperfecto que expresa una acción venidera en su transcurso, por lo que tiene carácter de hipotético o de suposición; sin embargo, recalca que el beneficiario no tiene nada que probar, porque no hubo *inter criminis*; y, que no se ha probado que realizó actos en su propio beneficio ni que causó lesión a otros.

Puntualiza que la fiscalía formuló acusación en su contra por el delito en mención, luego de lo cual se emitió la sentencia condenatoria con efecto suspensivo con fecha 5 de mayo de 2017, sentencia que fue confirmada mediante la citada sentencia de vista, y luego se recurrió mediante recurso de casación que fue declarado inadmisibile. Contra esta decisión se interpuso recurso de queja mal fundamentado y sin haberse acompañado los recaudos correspondientes.

Añade que el hecho delictuoso ocurrió el 7 de febrero de 2011, fecha en que se procedió a la inscripción del favorecido al Congreso de la República mediante el llenado de su hoja de vida; y la sentencia condenatoria fue emitida el 5 de mayo de 2017, la cual fue confirmada mediante sentencia de vista de fecha 4 de octubre de 2017, por lo que la acción penal prescribió el 7 de febrero de 2017; es decir, antes de que se emitan dichas sentencias.

Don Jhon Tulio Romero Lloclla a fojas 75 de autos, se ratifica en el contenido de la demanda y agrega que lo sentenciaron más de seis años y tres meses después de presuntamente haberse cometido el delito, cuando había prescrita la acción penal. Agrega que el delito no cumple con el requisito de la tipicidad; que su abogado anterior solo interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria y en la audiencia realizada en la Sala demandada efectuó su defensa; y que se le ha perjudicado al haber sido inhabilitado y se han afectado sus derechos a la libertad de tránsito, a participar en procesos electorales, al trabajo; entre otros.



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

Al recurrente, don Luis Alberto Longoria Muñoz, a fojas 79 de autos, se ratifica en el contenido de la demanda y agrega que el favorecido de forma involuntaria consignó las anotaciones respecto la conclusión de estudios superiores, lo cual no consignó en su segunda postulación.

La jueza demandada doña Angélica Aquino Juárez a fojas 53 de autos, sostiene que la Sala demandada que integró emitió la sentencia de vista que confirmó la sentencia condenatoria, en la cual se expusieron razones suficientes, pues se consideró que los hechos delictuosos ocurridos el 5 de julio de 2010, prescribieron en su modo ordinario, en tanto que la denuncia se formalizó el 23 de julio de 2014, mientras que el segundo hecho delictuoso ocurrió el 7 de febrero de 2011 y fue comunicado el 26 de agosto de 2014 al Ministerio Público, cuando ya habían transcurrido 4 años y 18 días y la acción penal en su forma ordinaria había prescrito.

Agrega la jueza demandada que la ulterior intervención del Ministerio Público materializada en la Disposición Fiscal 01 de fecha 6 de agosto de 2014, no implicó la interrupción de la prescripción en los términos establecidos por el artículo 83 del Código Penal, última parte, por tratarse de una disposición fiscal promovida luego de haber transcurrido en exceso el plazo ordinario de prescripción, por lo que el órgano jurisdiccional activó la persecución penal contra el beneficiario por el primer hecho, cuando la acción penal había prescrito, estableciendo el juicio de culpabilidad sobre este hecho prescrito; por lo que consideró que consideró declarar la extinción de la acción penal respecto al hecho ocurrido el 5 de julio de 2010; sin embargo, el análisis se circunscribió sobre el segundo hecho incriminatorio. Expresa también que en la sentencia de vista se ingresó el fondo de la controversia, en el que se confirmó la materialidad del delito y la responsabilidad del favorecido, sobre la base de la oralización de varios instrumentos.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial a fojas 127 de autos, solicita que la demanda sea declarada infundada o improcedente, porque no se ha cumplido el requisito de firmeza puesto que no se interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista; además, refiere que los medios probatorios actuados, así como las declaraciones prestadas en el juicio oral generaron convicción en los jueces demandados. Afirmar que el beneficiario contó con una defensa a lo largo del proceso, participó de forma activa durante las etapas de investigación preparatoria, intermedia y juicio oral; y que las sentencias fueron dictadas con observancia de las garantías mínimas del proceso, por lo que no se vulneraron derechos y sí más bien se aprecia una falta de diligenciamiento de la parte demandante, así como una actitud renuente para colaborar con la justicia. Agrega que la revaloración de medios probatorios actuados en el proceso penal ordinario y los alegatos de inocencia, son temas que no corresponden ser dilucidados por la judicatura constitucional.



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

El Segundo Juzgado Penal Permanente de La Molina y Cieneguilla, por Resolución 11, de fecha 9 de mayo de 2018 (f. 407), declara fundada en parte la demanda, por considerar que el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo se sanciona con una pena máxima de cuatro años de pena privativa de la libertad; que en el presente caso el plazo ordinario es de cuatro años y el extraordinario es de seis años; que el primer hecho ocurrió el 5 de julio de 2010, y el segundo hecho sucedió el 7 de febrero de 2011; que al momento de emitirse las sentencias condenatorias, la acción penal había prescrito. Asimismo, en otro extremo, declara infundada la demanda por considerar que carece de objeto pronunciarse sobre la alegación referida a que no se configuraría la tipicidad en la conducta del favorecido, debido a que el verbo rector del artículo 411 del Código Penal implica que probar es un futuro imperfecto y que no se habría acreditado ello.

La Sala Penal Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, revoca la sentencia apelada; y reformándola, declara improcedente la demanda, tras considerar que el segundo hecho delictivo sucedió el 7 de febrero de 2011, que el plazo de prescripción se suspendió el 19 de enero de 2015, fecha en que se formalizó y continuó la investigación preparatoria conforme se advierte del Oficio 181-2015-MP-DFHCO-5FPPC-2DI que obra en autos, hasta el día en que se emitió la sentencia 26-2017, Resolución 3, de fecha 9 de mayo de 2017, por lo que había transcurrido, a dicha fecha, 3 años, 11 meses y 12 días; por lo tanto, al concurrir una causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción ordinario, debe aplicarse el plazo extraordinario de prescripción; es decir, 6 años, conforme lo previsto por el último párrafo del artículo 83 del Código Penal. De ello concluye que la sentencia de vista, Resolución 13, de fecha 4 de octubre de 2017, fue expedida cuando la acción penal por el delito imputado se encontraba vigente, de modo que no había operado el plazo de prescripción extraordinaria.

## FUNDAMENTOS

### Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de: (i) la sentencia 26-2017, Resolución 3, de fecha 9 de mayo de 2017 (f. 97), que condenó al beneficiario a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo; y (ii) la sentencia de vista, Resolución 13, de fecha 4 de octubre de 2017 (f. 82), que confirmó la precitada sentencia, por haberse producido la prescripción de la acción penal con fecha 7 de febrero de 2017 (Expediente 00087-2015-58-1201-JR-PE-01). Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso y del principio de no lesividad.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

### Análisis del caso concreto

2. En un extremo de la demanda se alega que la Fiscalía Provincial Penal de Huánuco formalizó denuncia penal en contra del favorecido por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, cuyo verbo contenido en el artículo 411 del Código Penal es el probar, el cual es un futuro imperfecto que expresa una acción venidera en su transcurso, por lo que tiene carácter hipotético o de suposición); sin embargo, el beneficiario no tiene nada que probar porque no hubo *inter criminis*; y que no ha probado que realizó actos en su propio beneficio ni que causó lesión a otros.
3. Al respecto, este Tribunal considera que la valoración de las pruebas y su suficiencia, la subsunción de una conducta en un determinado tipo penal y temas de mera legalidad son aspectos propios de la judicatura ordinaria y no de la justicia constitucional, por lo que la demanda, en este extremo, debe ser rechazada conforme a lo previsto en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
4. El artículo 139, inciso 13, de la Constitución establece que la prescripción produce los efectos de cosa juzgada. Bajo este marco constitucional, el Código Penal, en sus artículos 80 a 83, reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, extinguiéndose la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.
5. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que la prescripción desde un punto de vista general es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y desde la óptica penal es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al *ius puniendi*, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio *pro homine*, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva, orientación que se funda en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien se presume lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica.
6. En este sentido, este Tribunal se ha pronunciado por el fondo de la demanda de *habeas corpus* en los casos en los que se ha denunciado la vulneración del principio





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

constitucional de la prescripción de la acción penal, tanto más si guarda relación con el derecho al plazo razonable del proceso (Sentencias 02506-2005-PHC/TC, 04900-2006-PHC/TC, 02466-2006-PHC/TC y 00331-2007-PHC/TC). Sin embargo, es preciso indicar que no obstante la relevancia constitucional de la prescripción de la acción penal, el cálculo de dicho lapso requiere, en algunas ocasiones, una dilucidación de asuntos que no corresponden a la justicia constitucional, como en los casos en los que a pesar que la demanda versa sobre prescripción de la acción penal se exija a la justicia constitucional determinar la fecha en que se consumó el delito (Sentencia 05890-2006-PHC/TC), o la dilucidación de si nos trata de un delito continuado o delito-masa (Sentencia 02320-2008-PHC/TC). En este orden de ideas, cuando en una demanda de *habeas corpus* en la que se alegue prescripción de la acción penal, el caso exija que el juez constitucional entre a dilucidar asuntos que están reservados a la justicia ordinaria, no será posible realizar el análisis constitucional del fondo ya que ello excede los límites de la justicia constitucional (Sentencias 03523-2008-PHC/TC, 02203-2008-PHC/TC, 00616-2008-PHC/TC, 02320-2008-PHC/TC).

7. En definitiva, a través del *habeas corpus* se podrá cuestionar la prosecución de un proceso penal o la emisión de una sentencia condenatoria cuando la prescripción de la acción penal del delito imputado haya operado, siempre que, obviamente y de manera previa, la justicia penal haya determinado los elementos temporales que permitan el cómputo del plazo de prescripción.
8. Ahora bien, el artículo 80 del Código Penal preceptúa que “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad”; además, el artículo 83 del mismo cuerpo legal dispone que “La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido (...) Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción” (Sentencia 00194-2013-PHC/TC).
9. En el presente caso, se le imputa al beneficiario que al inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones de Huánuco como candidato al cargo de Presidente Regional de Huánuco por el Partido Aprista Peruano el 5 de julio de 2010, en la Hoja de Declaración Jurada de Vida del Candidato, en el rubro III, Formación Académica-Estudios Universitarios, declaró bajo juramento tener la condición de egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y afirmó que acreditaba su condición con un diploma de egresado, para lo cual consignó haber estudiado entre el mes de mayo de 1982 y el mes de marzo de 1989, e incluso declaró que cursó estudios de post grado en



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

Madrid, España entre los años 1989 y 1990. También se le imputa al favorecido que se inscribió y postuló al Congreso de la República por la región Huánuco en representación del mencionado partido con fecha 7 de febrero de 2011, y en el rubro Formación Académica-Estudios Universitarios, declaró bajo juramento tener la condición de egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y afirmó que acreditaba su condición con un diploma de egresado, para lo cual consignó haber estudiado entre el mes de mayo de 1982 y el mes de marzo de 1989, conforme se aprecia del numeral 3.2 del considerando: **TERCER ANÁLISIS DE LOS HECHOS Y VALORACIÓN PROBATORIA** de la sentencia 26-2017, Resolución 3, de fecha 9 de mayo de 2017.

10. Al momento de la comisión del segundo hecho delictuoso (7 de febrero de 2011), el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo imputado al beneficiario se encontraba previsto en el artículo 411 del Código Penal, que lo sancionaba con una pena máxima de cuatro años de pena privativa de la libertad, por lo que, conforme al artículo 80 del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción para el presente caso es de cuatro años; y el plazo extraordinario, de seis años.
11. Se debe precisar que la Disposición 4, de fecha 12 de enero de 2015, de Formalización y continuación de la investigación preparatoria, fue emitida por el Ministerio Público con fecha con fecha 12 de enero de 2015 (f. 551), fecha a partir de la cual se suspendió el plazo de la prescripción conforme a lo previsto en el inciso 1 del artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal. Dicha suspensión no podía ser indefinida, puesto que tenía un límite temporal y no podía ser prolongada más allá del tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más la mitad de dicho plazo, conforme lo ha considerado el Acuerdo Plenario 0003-2012/CJ-116, considerando decimoprimer, y la Casación 895-2016, considerando decimoprimer.
12. Asimismo, a partir del 12 de enero de 2015, corrieron los 6 años (plazo equivalente al plazo de prescripción extraordinaria). A ello cabía adicionar el plazo que correspondió a la continuación del curso de la prescripción, que fue suspendido inicialmente por actuaciones iniciales del Ministerio Público efectuadas en el marco de la etapa de la investigación preliminar, según lo considerado en la Casación 779-2016 (considerando 7.6), y que suman 3 años, 11 meses y 5 días, por lo que la acción penal para el delito imputado prescribiría en una fecha posterior a las fechas en que fueron emitidas las sentencias condenatorias (9 de mayo de 2017 y 4 de octubre de 2017).





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

### HA RESUELTO

1. Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda respecto a los fundamentos 2 a 3, *supra*.
2. Declarar **INFUNDADA** la demanda respecto a la prescripción de la acción penal, por no haberse acreditado la afectación del principio constitucional de prescripción de la acción penal en conexidad con el derecho a la libertad personal.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**LEDESMA NARVÁEZ**

**MIRANDA CANALES**

**RAMOS NÚÑEZ**

**ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**

<b>PONENTE ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA</b>
-----------------------------------------



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

### VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Estoy de acuerdo con el sentido de la ponencia, en la medida que declara **IMPROCEDENTE** en un extremo la demanda de *habeas corpus* e **INFUNDADA** en lo demás que contiene.

Lima, 22 de enero de 2021

S.

**FERRERO COSTA**



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04726-2018-PHC/TC

LIMA ESTE

JHON TULIO ROMERO LLOCLLA,  
representado por LUIS ALBERTO  
LONGORIA MUÑOZ

### VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Con el debido respeto por mis colegas magistrados, emito el presente voto singular.

La demanda pretende que se declare la nulidad de la sentencia 26-2017, de 9 de mayo de 2017, que condenó al beneficiario a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo; así como la de su confirmatoria, la sentencia de vista de 4 de octubre de 2017. Refiere que en este caso, se ha producido la prescripción de la acción (Expediente 00087-2015-58-1201-JR-PE-01).

El artículo 80 del Código Penal preceptúa que

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

Por su parte, el artículo 83 del mismo código dispone que

La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido (...) Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

Los hechos imputados, ocurrieron el 5 de julio de 2010 y 7 de febrero de 2011, como se aprecia del numeral 3.2 del considerando de la sentencia 26-2017, de 9 de mayo de 2017. En ambos casos, estaba vigente el artículo 411 del Código Penal, que sancionaba el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, con una pena máxima de cuatro años de pena privativa de la libertad.

En ese sentido, el plazo extraordinario de prescripción era de seis años, por lo que los hechos imputados prescribieron el 5 de julio de 2016 y el 7 de febrero de 2017; por ello, al momento en que se expidió las sentencias condenatorias de 9 de mayo y 4 de octubre de 2017, la citada prescripción ya había operado.

Por estas razones, considero que la demanda debe ser declarada **FUNDADA**; y en consecuencia, **NULAS** las sentencias 26-2017, de 9 de mayo de 2017 (f. 97), así como su confirmatoria, la sentencia de vista, de 4 de octubre de 2017 (f. 82); en consecuencia, debe reponerse el estado del proceso a la etapa de emitir sentencia de primera instancia, debiendo el Cuarto Juzgado Unipersonal de Huánuco tener presente lo expuesto en este voto.

S.

**SARDÓN DE TABOADA**